

Bogotá, D.C.

Al contestar por favor cite estos datos:

Fecha de Radicado: 2024-03-26 16:45:35

No. de Radicado: 20241100119281

A quien corresponda,

ANÓNIMO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA.
PROCEDIMIENTO: TRÁMITES DE CONSULTAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DERECHOS DE PETICIÓN.
ACTIVIDAD: RESPUESTA A CONSULTA.
ASUNTO: CAUSALES ADICIONALES PARA SER MIEMBROS DEL CONSEJO TENIENDO EN CUENTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO – DECRETO 962 DE 2018 TÍTULO 11 CAPÍTULO 4 ARTÍCULO 2.11.11.4.2,
RADICADO: 20244400047712 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024.

Cordial saludo.

Acusamos de recibida en esta oficina su comunicado radicado como se identifica en el asunto del presente documento, mediante el cual requiere concepto la legalidad o ilegalidad en la prohibición para ser miembros del consejo de administración o junta de vigilancia dentro de una cooperativa de trabajo asociado.

Ahora bien, para resolver su solicitud inicialmente informamos:

I. LA PETICIÓN ELEVADA

Se identifica que la solicitud indica:

“¿Se puede consignar en el código de ética y buen gobierno causales adicionales a la establecidas en los estatutos para ser miembro del Consejo de administración de una cooperativa de trabajo asociado?”

II. ANALISIS NORMATIVO GENERAL Y ESPECIFICO

Una vez verificado el escrito del documento, informamos que de conformidad con el numeral 15 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, es de nuestra competencia absolver las consultas elevadas a esta entidad; aclarando que la misma no obedece a una función de asesoría puesto que la Superintendencia de la Economía Solidaria no se encuentra prevista como un órgano asesor.



Con el fin de atender a su consulta, procedemos a hacer un análisis dentro del marco normativo establecido para las entidades del sector de la economía solidaria, con el fin de que sean tenidas en cuenta y sirvan como fundamento para dar respuesta a lo planteado por parte del consultante. Es así como nos permitimos señalar el artículo 2 de la Ley 79 de 1988, en la cual se establece el libre desarrollo del cual gozan las entidades del sector de la economía solidaria:

“Artículo 2º. Declárese de interés común la promoción, la protección y el ejercicio del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares.

El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas.”

De lo anterior se infiere que, se reconoce al cooperativismo como un sistema beneficioso para la sociedad en términos de desarrollo económico, democracia, distribución equitativa de la propiedad y del ingreso, así como para la regulación de actividades económicas en favor de la comunidad y las clases populares. Teniendo así que el Estado tiene la responsabilidad de promover, proteger y vigilar el desarrollo del cooperativismo, sin interferir en la autonomía de las organizaciones cooperativas.

Es importante determinar en qué consiste una cooperativa de trabajo asociado, definida en el artículo 70 de la Ley 79 de 1988 en donde se determina:

“Artículo 70. Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios.”

Por lo que las cooperativas de trabajo asociado son entidades sin ánimo de lucro donde se unen personas naturales que también son trabajadoras, y que contribuyen económicamente a la cooperativa mediante su propia capacidad de trabajo. Estas cooperativas se establecen con el propósito de llevar a cabo actividades económicas, profesionales o intelectuales en conjunto, con el fin de producir bienes, realizar obras o brindar servicios para satisfacer tanto las necesidades de sus asociados como las de la comunidad en general.

A su vez la legislación cooperativa consagra en la Ley 454 de 1998, en su artículo 4 los principales generales que acobijan a las entidades de este sector los cuales son:

“Artículo 4º.- Principios de la economía solidaria. Son principios de la Economía Solidaria:

- 1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación, tienen primacía sobre los medios de producción.*
- 2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.*

3. *Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.*
4. *Adhesión voluntaria, responsable y abierta.*
5. *Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.*
6. *Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.*
7. *Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva.*
8. *Autonomía, autodeterminación y autogobierno.*
9. *Servicio a la comunidad.*
10. *Integración con otras organizaciones del mismo sector.*
11. *Promoción de la cultura ecológica.”*

Artículo por el cual se establecen los principios fundamentales de la economía solidaria. Estos principios incluyen la primacía del ser humano, su trabajo y la cooperación sobre los medios de producción, el espíritu de solidaridad y ayuda mutua, la administración democrática y participativa, la adhesión voluntaria y responsable, la propiedad asociativa y solidaria de los medios de producción, la participación económica justa de los asociados, la formación e información continua, la autonomía y autogobierno, el servicio a la comunidad, la integración con otras organizaciones del mismo sector, y la promoción de la cultura ecológica. Estos principios sirven como base para el funcionamiento y desarrollo de la economía solidaria.

Por otro lado, la Guía del Buen Gobierno, Circular Número 21 de 2022 en su capítulo primero numeral 2.2, donde hace referencia al contenido que deberá tener este documento para el buen manejo de las relaciones entre los órganos de administración y vigilancia y todos los empleados de las organizaciones.

“2.2 Código de Buen Gobierno El Código de Buen Gobierno es un documento donde se compila la filosofía, los principios, las reglas y en general las normas que rigen el manejo de las relaciones entre la administración, órganos de control y vigilancia, y todos los empleados de las organizaciones, para preservar la ética y la transparencia en su gestión, así como una adecuada administración, con integridad, equidad y efectividad, en procura de obtener y conservar la confianza de los asociados y de la comunidad en general. Para el desarrollo de estos lineamientos, se recomienda a las organizaciones vigiladas, incluir en sus códigos, los principios y subprincipios establecidos por la OCDE1, adaptados al sector de la economía solidaria.”

El Código de Buen Gobierno es un documento que recopila las filosofías, principios, reglas y normas que rigen las relaciones entre la administración, los órganos de control y vigilancia, y todos los empleados de las organizaciones. Su objetivo es preservar la ética y la transparencia en la gestión, así como asegurar una administración adecuada, integra, equitativa y efectiva, con el fin de ganar y mantener la confianza de los asociados y la comunidad en general.

Tenemos también que el Decreto 962 de 2018 por medio del cual se hace relación de las normas de buen gobierno aplicables a las organizaciones del sector de la economía solidaria

para la función de control social y para representar a todos los asociados, así como capacidades personales, conocimientos, integridad ética y destrezas apropiadas para desempeñar el cargo. Además, se señala la importancia de que los candidatos manifiesten su conocimiento sobre las funciones, deberes y prohibiciones establecidas en la normativa y estatutos de la organización. Se destaca que las organizaciones deben adaptar estos requisitos al nivel de complejidad y características de sus operaciones, y deben promover la formación y capacitación de todos sus asociados, especialmente en relación con estos requisitos.

III. RESPUESTAS

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a emitir respuesta a su consulta en el siguiente sentido:

El manual de buen gobierno es un compendio, de principios, reglas y normas que guían las interacciones entre la administración, los órganos de control y vigilancia, y todos los empleados de una organización. Su propósito se basa en mantener la ética y la transparencia en la gestión, además de asegurar una administración adecuada, equitativa y efectiva. Con el fin de mantener la confianza de los asociados y la comunidad en general, es importante resaltar que este código de buen gobierno solo es aplicable para las cooperativas de ahorro y crédito y para las demás organizaciones del sector solidario estas lo podrán implementar de forma potestativa.

Ahora bien, las cooperativas, en virtud de su autonomía reconocida por la ley, tienen la capacidad legal para definir en sus estatutos todos los aspectos relacionados con su estructura organizativa interna. Esto incluye los procedimientos y funciones de los órganos de vigilancia, así como las incompatibilidades y los métodos de elección y remoción de sus miembros. Le corresponde a la asamblea general de asociados de una organización solidaria elegir a los miembros del Consejo de Administración y definir aspectos como, el periodo de gestión, las causales de remoción y las funciones de dicho órgano. Estos aspectos deben ser establecidos en los reglamentos de la organización.

Por lo anterior entonces, si podrán señalar en el código de buen gobierno causales adicionales a las ya establecidas por medio de los estatutos, siempre teniendo en cuenta que los parámetros que se van adoptar se ajusten al marco normativo vigente que acobija a este sector de la economía solidaria.

De esta forma esperamos haber atendido su inquietud, advirtiéndole que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en

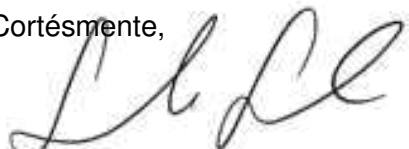
110- 20244400047712

Página 7 de 7

2024-03-26 16:45:35

respuesta a una consulta, son orientaciones y puntos de vista, que no comprenden la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de actuaciones particulares. La respuesta es general y no tiene carácter obligatorio ni vinculante, por ello, se emite bajo los parámetros del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cortésmente,



BEATRIZ LEONELA LIZCANO CASTRO
Jefa Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: ANGGIE CATALINA MURILLO TRIVIÑO
Revisó: DIANA KATHERINE CABRERA CASTILLO, N.I LUNA
MARIA CLAUDIA SARMIENTO ROJAS